



BOCETO DE DOCUMENTO POSICIÓN DE RIGAS EN VISTA DE LA COP 17 DE DURBAN Y DE RIO+20

Situación de los cambios climáticos

Es ahora reconocido también por la comunidad científica que el aumento de 2 grados centígrados de la temperatura previsto en los próximos 20 años haría irreversible los daños provocados por el cambio climático a nivel planetario. Ya hoy se hacen sentir pesadamente los efectos del cambio climático como consecuencia de las elecciones puestas en marcha en varios niveles de los gobiernos nacionales, de las agencias de la ONU, de las cumbres internacionales para dar cabida a los intereses económicos inmediatos de las corporaciones transnacionales. Los desastres naturales van en aumento: cada vez más numerosos son los casos de sequías y de inundaciones; la desertificación avanza; los glaciares se derriten rápidamente causando el aumento del nivel del mar; la contaminación química provocan la acidificación de los océanos; las zonas forestales -en particular las tropicales- se reducen; se modifican los ciclos bio-geo-químicos del nitrógeno y el fósforo. Todos estos graves fenómenos favorecen una fuerte pérdida de la biodiversidad, definidas por los biólogos como la “sexta extinción masiva”, la extinción más rápida de las especies vivientes desde la aparición de la vida en la tierra no provocada por un asteroide gigante, tempestades solares o erupciones volcánicas, sino por la fuerza destructiva del hombre. Esto va acompañado por una creciente desigualdad en la producción, en el acceso a la alimentación y el aumento de las migraciones climáticas, cuyas proyecciones anunciadas entre 250 y un millón de refugiados climáticos para el año 2050.

La comunidad científica está de acuerdo en que para limitar la creciente amenaza que pesa sobre la reproducción de la vida en el planeta y para afrontar el empobrecimiento económico y social no solo de los sectores más débiles de la sociedad, sino también de las clases medias, es necesario disminuir un 80% las emisiones de efecto invernadero para el 2050.

Un cuadro de la “global governance”

Por desgracia, las recetas propuestas por los gobiernos, en la cumbre de Copenhagen primero y Cancún después han demostrado la falta de voluntad política por parte de la “global governance”, y en particular de los países más contaminantes, de asumir la responsabilidad de la situación. Una falta de voluntad que proviene de haber abdicado en favor del dogma del libre mercado y de las presiones cada vez más invasiva de los grupos de presión de las grandes corporaciones que trabajan cotidianamente para anular cualquier intención de construir reformas y normas en defensa del medio ambiente y de los bienes comunes contrarias a los intereses de los grandes capitales.

Grandes multinacionales, BM y gobiernos se reunirán de nuevo en Durban para la 17ª Conferencias de las Partes sobre el clima a finales de noviembre de 2011, y después en Rio en Junio de 2012, durante la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible Rio+20. Desgraciadamente de estas reuniones parece no venir nada bueno que pueda detener y contrarrestar el drama del cambio climático la amenaza de la crisis ecológica. De hecho, hoy los países del G77 junto al gobierno de Bolivia denuncian la falta total de transparencia y la incoherencia de las medidas que en vez de afrontar la crisis la complican. Las únicas medidas adoptadas son en realidad necesarias más para hacer caja a través de procesos de financiarización de la naturaleza. En nombre de la crisis económica y financiera serán sacrificados los derechos de la naturaleza y la justicia ambiental. El objetivo que nos encontramos delante es, por tanto, una reorganización de la “global



governance”, precisamente a través de las propias medidas que han provocado la crisis global: mercado, “green economy”, privatizaciones y tecnología. El cuadro de fondo se mantiene inalterado y nada se hará para disminuir la fiebre del planeta, reducir el consumo insostenible y reconvertir la producción.

Todas las soluciones que vienen propuestas de la “global governance”, de los gobiernos y de las fuerzas políticas hasta ahora han sido traducidas en decisiones que han mirado únicamente a la salvaguardia de los intereses de pocos y las posiciones de desempeño de un modelo energético obsoleto e insostenible. Una primera consideración se refiere a las “no soluciones” en juego. El acuerdo de Kyoto que preveía una disminución del 5% de las emisiones para el 2012 según los niveles de 1990 y que se discutirá de nuevo el próximo junio de 2012 durante Rio+20, es el único acuerdo en activo. Los resultados, o no resultados, lograrán demostrar los límites de tales acuerdos que se ha revelado como insuficiente y no vinculante. Del mismo modo, el proceso de las Conferencias de las Partes sobre el Cambio Climático ha sido no concluyente: no existe un límite máximo de emisiones para los países más contaminantes, ni un plan de reducción vinculante prioritariamente para estos países.

Se han definido, en cambio, una serie de “falsas soluciones”, basadas en la financiarización del cambio climático y la mercantilización de la naturaleza. La “global governance” pretende “reformular” el modelo económico capitalista a través de operaciones de marketing como la “green economy” que sustentan los mismos equilibrios de poder y los mismos mecanismos de producción, distribución y consumo respecto al modelo actual. Un “capitalismo verde”, oxímoron horrible, que propone contemporáneamente “incineradores” y monocultivos para biocarburantes, centrales nucleares y grandes plantas de energías renovables como el fotovoltaico en el suelo o las mega represas, tecnologías limpias y aumento del consumo de materias primas, etc., tiene como única consecuencia el agravamiento de la crisis ambiental y social. Las “falsas soluciones” planificadas y ya aplicadas para afrontar el cambio climático se basan esencialmente en el mercado del carbono y los, así llamados, Mecanismos de Desarrollo Limpio, que serán financiados a través de un Fondo Verde creado en Cancún durante la COP 16 y gestionado por la Banca Mundial. De la planificación de Fondo Verde se discutirá en Durban en el próximo otoño.

Esta paradójica falta de adecuación es evidente en la decisión de confiar la cuestión climática a mecanismos de financiarización que han hecho de la emergencia, una ulterior ocasión de enriquecimiento para los capitales privados, la especulación financiera y los gobiernos. A través de el mercado del carbono se ha introducido el absurdo principio del “derecho a contaminar”, mediante el pago de una compensación económica por la contaminación producida. Mecanismos como el comercio de carbono y el REDD+ (que considera el monocultivo y la deforestación propuestas válidas para hacer frente al cambio climático) han tenido, en definitiva, como único resultado un agravamiento de la injusticia ambiental y climática.



rete i

Cap and Trade ¿Como funciona?

La “global governance” planea limitar las emisiones a través de la creación de créditos de carbono. Los créditos o permisos, verdaderos instrumentos financieros, permitiendo a quien contamina más comprar a quien contamina menos el propio “derecho” a contaminar. Créditos gratuitos vienen también concedidos por quien aplica los “Mecanismos de Desarrollo Limpio” y otras acciones de mitigación y compensación entre las incluidas dentro del REDD+.

Este sistema corresponde primero a una necesidad del mercado financiero, necesitado de crear nuevos mercados y “burbujas financieras” de vida útil limitada. No garantiza la disminución de las emisiones, solo la especulación y no permite a los países menos industrializados disminuir las propias emisiones. De hecho con el Cap and Trade, no hay regulación según quien ni cómo contamina, y no hay un límite de emisiones máximas, resultando imposible una verdadera disminución de las emisiones.

Otras falsas soluciones de mitigación

Entre las falsas soluciones de mitigación implementadas por la “global governance” y denunciadas por los movimientos y por la sociedad civil a nivel internacional figuran, además del Cap and Trade, el mecanismo de Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD o REDD+) y la Geo-ingeniería.

REDD+

El mecanismo teóricamente está diseñado para la conservación y la reforestación, pero en realidad se traduce en la promoción de la producción agro-forestal sobre la que se sustenta esencialmente la producción de “bio” carburantes. La protección de los bosques y la reforestación de aquellos degradados es una obligación de todos los gobiernos que debe ser realizada sin limitar la autonomía, los derechos o el control de los pueblos indígenas y campesinos sobre la tierra y sobre sus territorios, visto que han sido los propios campesinos e indígenas los que han conservado y los que mejor conocen y garantizan estos importantísimos y complejos ecosistemas. Una obligación que, sin embargo, no debe transformarse en la justificación a través de la cual las multinacionales y los gobiernos del norte pueden de un lado continuar a contaminar y del otro a diseminar monocultivos de árboles, haciéndolos pasar por bosques. Los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas y de los campesinos deben ser reconocidos explícitamente en cualquier acuerdo climático.

La Geo-ingeniería

Los movimientos se niegan a jugar a Frankenstein con la geo-ingeniería: las propuestas a gran escala para alterar “positivamente” el clima, como el biochar (o carbón agrícola) y las plantas genéticamente modificadas, para obtener un supuesto aumento de la reflectividad y la resistencia a la sequía, al calor o a la sal; la fertilización de los océanos o la creación de nubes mediante la inyección de dióxido de azufre a la atmósfera crean problemas incontrolables: algas neurotóxicas, radiaciones, bacterias resistentes, etc. La geo-ingeniería es solo un ejemplo más de como las empresas multinacionales están dispuestas a jugar con el futuro del planeta y de la humanidad con el fin de crear nuevas fuentes de beneficio.

Posiciones de poder en Cancún y en el post-Cancún



Se ha confirmado en Cancún la hegemonía y la prioridad del mercado económico y financiero en la gestión de la crisis ecológica, junto con la falta de un liderazgo fuerte que sepa como hacer frente al actual gobierno e introducir medidas coercitivas que responsabilicen a los gobiernos, en particular a los países ricos, más “consumidores de naturaleza” y más contaminantes. Al mismo tiempo en Cancún durante la COP 16 no se ha producido una polarización de las principales potencias económicas en la toma de decisiones, así como ocurrió en Copenhagen donde fue imposible el llegar a un acuerdo. No son ya, por lo tanto, solo los países occidentales incidiendo a través del papel central de USA, sino que la China y las nuevas potencias económicas asiáticas han demostrado un fuerte protagonismo.

La única posición valiente ha sido la de Bolivia, manteniéndose como único país parte no firmante del acuerdo de Cancún. Una exclusión que ha sido denunciada recientemente por los países del ALBA participantes en la reunión de negociación de los países del G77 + China sobre el cambio climático mantenida en Bangkok. Bolivia también ha sido el único estado que demanda a nivel internacional políticas incisivas para la reducción de las emisiones y por una gestión de la crisis climática basada sobre los derechos del hombre y de la naturaleza, poniendo en práctica un diálogo y un proceso participativo involucrando a los movimientos sociales bolivianos y de todo el mundo, como sucedió en la Cumbre de los Pueblos de Cochabamba en Abril del 2010.

En este contexto, Italia se mantiene al margen, uno de los pocos estados que se mantiene “negacionista”. Se opone a la propuesta europea de llegar a más del 30% de reducción de las emisiones y de establecer objetivos vinculantes de eficiencia energética. También se ha opuesto a la extensión del protocolo de Kyoto y no tiene ningún plan nacional ni ha invertido recursos para afrontar el cambio climático.

La Unión Europea ha propuesto, en lugar de Cancún, la reducción interna del 30% de las emisiones para el 2020 si otros grandes contaminadores se comprometen a aceptar y respetar el compromiso, más allá de la ya implementada Estrategia Europea del 20-20-20 que preveía una reducción del 20% de las emisiones, un aumento del 20% de la eficiencia energética y el 20% de energías renovables para el 2020. Es bueno recordar, sin embargo, que la legislación europea es poco vinculante, como demuestran los escasos efectos de la Estrategia de la Unión en Italia. La Unión Europea también se encuentra entre los primeros promotores del mecanismo de financiamiento cap and give away que ha llevado a la desregulación del valor de los permisos, de los precios de las energías fósiles y al aumento de las emisiones en Europa. Sobretudo, hay que recordar que el ambicioso plan energético europeo se basa en realidad en el proyecto Desertec (consorcio Deutsche Bank, Siemens, ecc.) y Transgreen (consorcio francés Super Grid) para la instalación en las regiones desérticas del Sahara de enormes extensiones de paneles solares y el transporte sub-mediterráneo, Nuevas colonizaciones del planeta y nuevas concentraciones de poder se avecinan en nombre de la energía limpia.



Comisión Europea

Hoja de ruta hacia una economía competitiva de bajas emisiones de carbono en el 2050, presentada al parlamento europeo en Marzo de 2011

El plan presentado por la comisión europea para implementar una transición hacia una “economía de bajas emisiones” prevé una reducción de las emisiones internas en un 80% en el 2050, pasando por las etapas intermedias del 40% en el 2030, y el 60% en el 2040, yendo mucho más allá que las proyecciones del actual plan 20-20-20 que daría lugar a una reducción de emisiones del 40% para 2050.

El Plan estratégico de reducciones propuesto pretende intervenir en:

-El sector energético “descarbonizado” a través de las energías renovables, generación distribuida, comercio de la cuotas de emisión, impuestos sobre la energía, y apoyo tecnológico, para lograr una reducción de las emisiones del sector del 93% para el 2050;

-El transporte a través de la electrificación y la tarificación de los transportes, la planificación urbanística inteligente, para alcanzar una reducción de las emisiones del sector del 90% en el 2050;

-El sector edilicio: a través de la construcción sostenible para alcanzar una reducción de las emisiones del sector de un 90% para el 2050;

-El sector industrial: a través de la eficientización de la producción, el reciclaje, la innovación tecnológica, la captura y almacenamiento de las emisiones para alcanzar una reducción de las emisiones del sector de un 83% para el 2050;

-La agricultura: a través de la eficiencia sostenible, la diversificación y la comercialización local de los productos, la reducción de la erosión, la reforestación, para alcanzar una reducción de las emisiones del sector del 42% para el 2050.

La Comisión subraya la necesidad de aumentar las inversiones de capital (incremento anual medio de 270 mil millones), reducir la factura energética y la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles, crear nuevos puestos de trabajo. Se requieren cambios necesarios de la economía y del trabajo para llegar a lograr el objetivo de la reducción de las emisiones en un 80%.

En las últimas negociaciones intermedias sobre el clima en Tailandia y Alemania en preparación de la cumbre de Durban, las propuestas presentadas por los mayores contaminantes del mundo son siempre las mismas y son idénticas a aquellas realizadas por las mismas corporaciones e instituciones financieras internacionales responsables del cambio climático y de la contaminación planetaria. Mercado, “green economy” y privatizaciones son una mezcla letal que pondría la última palabra sobre la esperanza de invertir la rueda y dar respuesta a las legítimas aspiraciones de gran parte de la humanidad que paga el precio de la crisis ecológica y que en estos años se ha rebelado contra la dictadura de los intereses económicos a expensas del derecho a la vida.

Las propuestas de la “sociedad en movimiento” para la implementación de verdaderas soluciones

De frente a este escenario de ausencia de propuestas eficaces provenientes de los gobiernos y de las instituciones, existe un amplio y heterogéneo campo de actores sociales, asociaciones, comités, sindicatos, organizaciones, intelectuales e individuos que componen la sociedad en movimiento,



que llevan a cabo múltiples alternativas concretas y modelos de participación real y democrática. Estas nuevas subjetividades son portadoras de una nueva epistemología que se funda sobre la interdependencia y la interconexión entre hombre y naturaleza. Una ética de la tierra que pone en el centro la justicia ambiental y la justicia social sobre los dos ejes sobre los que reconstruir un modelo para superar la crisis y contrarrestar el empobrecimiento social y la mercantilización de la vida y de la naturaleza. Un nuevo campo que tiene la una misión histórica: detener la devastación del planeta, devolver al centro de las políticas internacionales el concepto del bien común de la humanidad y del derecho a la vida. Hablar, por lo tanto, de crisis ecológica y justicia ambiental, significa meter mano a la democracia. Una democracia degenerada y vaciada de significado por la crisis del modelo capitalista y por los actuales gobiernos, dirigida por una casta de cosmócratas, que en nombre de la supervivencia de sus propios ingresos reduce la política a espectadora, privando a los ciudadanos de la posibilidad de escoger su propio destino. Una ruta ya lanzada desde el Foro Social Mundial, de las contracumbres sobre el clima y reforzado de la Conferencia de los Pueblos de Cochabamba, creada por la iniciativa de los movimientos latinoamericanos y el Gobierno Boliviano. A causa de esta emergencia planetaria los movimientos de todo el mundo y los gobiernos más responsables se encontrarán nuevamente el próximo Junio de 2012 en Rio, paralelamente a la cumbre de la ONU Rio+20, con el fin de contrarrestar la tentativa hegemónica de las multinacionales y de los principales gobiernos contaminantes del planeta de dictar la línea e incluso de especular sobre el desastre ecológico agravándolo.

Numerosas son las propuestas lanzadas, de las cuales mostramos brevemente aquí los principales puntos que RIGAS hace suyas:

- la transferencia de los costes por las fuerzas armadas, la guerra y la seguridad a gastos para afrontar el cambio climático, la transferencia del 6% del PIB de los países contaminantes para medidas de mitigación, de adaptación y la imposición de la emisión para la reconversión;
- la creación de un verdadero marco coercitivo que pueda garantizar la reducción de las emisiones basado sobre el concepto de responsabilidad de los contaminantes en la lucha del cambio climático y el apoyo a los países con menos posibilidades económicas;
- la implementación de planes de preservación, recuperación y gestión sostenible de los bosques según la necesidad, no según su valor en el mercado;
- el desarrollo de una nueva jurisdicción nacional e internacional que tenga como inspiración la justicia ambiental y climática, que haga cuenta de la deuda ecológica acumulada, que prevea la constitución de tribunales ambientales nacionales y de un tribunal internacional para la justicia ambiental y climática;
- la transferencia de tecnología a los países con menores posibilidades económicas;
- la salvaguardia y el apoyo a la agricultura campesina local, por ejemplo la agricultura familiar, excluyendo aquella dirigida a la exportación;
- el desarrollo de una sociedad “post-carbon” decrecida en un sector industrial reconvertido y no extractivista, eficiencia energética, transporte y urbanización sostenible y de bajo impacto, que permita el logro de una reducción de más del 80% de las emisiones para el año 2050;

Estas propuestas, concretas y realizables, demuestran como existe la posibilidad de salir de la crisis sin renunciar a los derechos sino también mejorando las condiciones de la vida para la mayor parte de los habitantes del planeta, combatiendo concretamente la pobreza. Teniendo en cuenta la crisis de la democracia representativa que los movimientos de casi todas partes deben encarar, el protagonismo de la sociedad en movimiento en el promover y practicar la alternativa, desde el nivel



global al nacional y local se convertirá en el elemento central para construir un sentido común y una transformación cultural generalizada necesaria para hacer deseables las transformaciones que necesitamos. Resultará, por lo tanto, fundamental la capacidad de la sociedad en movimiento de construir al mismo tiempo pensamiento y práctica hegemónica en la sociedad capaz de revertir un modelo de desarrollo que querrá reciclarse a través de la insostenibilidad de la “green economy”.

RIGAS: propuestas y objetivos

En este contexto, la Red Italiana para la Justicia Ambiental y Social será portadora de las siguientes propuestas en las movilizaciones sociales previstas para las próximas citas internacionales sobre el clima y la biodiversidad en las que participará, en Durban en Diciembre de 2011 y en Rio en Junio de 2012 con la segunda Cumbre de los Pueblos que se celebrará en los mismos días del encuentro Rio+20. Las mismas propuestas serán centrales en las acciones nacionales de RIGAS y de las organizaciones que la conforman, en particular en las cuestiones relacionadas con la energía y los bienes comunes, dos prioridades del contexto nacional actual.

Entre sus objetivos, RIGAS reafirma la centralidad de la democracia participativa y comunitaria en la creación de las condiciones para entrelazar los temas de la vida con un nuevo modelo de desarrollo y de participación capaz de construir un proceso de acumulación de fuerzas en grado de mirar las citas de Durban y Rio como un momento de ruptura y al mismo tiempo de renacimiento de una visión universal fundada sobre los derechos humanos y los de la naturaleza.

Eco-mafia

RIGAS denuncia la grave situación de la ecomafia en Italia, donde la ausencia del Estado y el poder de la mafia en colusión con el poder económico son responsables de muchas situaciones de grave degradación ambiental y social. Una de las prioridades que RIGAS ha asumido en su camino por la justicia ambiental y social es, en este sentido, la lucha contra la mafia y la injusticia social.

Refugiados ambientales

A la luz de las proyecciones sobre los fenómenos migratorios, de las nuevas políticas italianas y europeas, y de los síntomas visibles en nuestro país de la catastrófica gestión de las migraciones, RIGAS subraya la necesidad de desarrollar nuevas políticas de gestión de la inmigración y apoya iniciativas de las bases que apuntan al apoyo de la comunidad migrante en Italia, con especial referencias al sur del país. Considera fundamentalmente el trabajo de sensibilización sobre el nexo entre cambio climático, degradación ambiental y fenómenos migratorios.

Planificación urbana, consumo del suelo y gestión del territorio

RIGAS reconoce la necesidad de difusión sobre el territorio de proyectos urbanísticos sostenibles, entre los cuales se incluye las “transition town”, ciudad empeñada en un proceso de reconversión sostenible que apunta a cero emisiones de carbono. Sostiene el camino de los ayuntamientos italianos virtuosos para el desarrollo armonioso y sostenible de la gestión de los territorios locales articulado en 5 líneas guía: la gestión sostenible y participada del territorio, la huella ecológica de los ayuntamientos, la gestión de los residuos, la movilidad sostenible y la promoción de nuevos estilos de vida.

Más en general, para detener el saqueo del territorio a beneficio de la especulación inmobiliaria y de



la renta de la tierra, es necesario que crezca una generalizada “conciencia de los lugares”, un enraizamiento territorial de la economía, una reducción de las economías de escala y una acortamiento de los beneficios productivos. Un reconocimiento de la “soberanía” del territorio por las poblaciones locales contra cada sobredeterminación autoritaria y a favor, sin embargo, de la colaboración libre y recíproca entre comunidades autónomas y federadas. A partir de los talleres territoriales, como en el caso de Nápoles (“Taller por la constituyente de los bienes comunes”) es posible delinear desde las bases nuevas arquitecturas de los poderes públicos efectivamente participativos y populares.

Transporte y movilidad suave

RIGAS manifiesta su preocupación por las políticas infraestructurales y de transporte llevadas a cabo en Italia, que a menudo no corresponden a la verdadera demanda de movilidad de las personas o cosas, sino a una oportunidad de beneficio. Evidentes son los ejemplos de Val Di Susa o del puente sobre el Estrecho, dos casos donde se trata de imponer proyectos destructivos para el territorio haciendo caso omiso a la opinión y las propuestas de las comunidades residentes y, a menudo, de las administraciones locales. RIGAS sostiene propuestas que se basen en un desarrollo de las vías de comunicación y de los transportes sostenibles del punto de vista ambiental y social y que responda en primer lugar a las exigencias de las poblaciones locales previendo verdaderos mecanismos de consulta y de control social de procesos participativos en la toma de decisiones.

Cero residuos

Sobre el tema relacionado con los niveles de consumo y de la producción y gestión de los residuos, RIGAS apoya la experimentación y promueve la difusión de nuevas formas de gestión del ciclo de residuos. La situación de la gestión de los residuos en Italia, caracterizada por una gestión irracional, insostenible y criminal, contaminada de prácticas mafiosas, en particular en el sur de país, es dramática. En este sentido RIGAS promueve la gestión integrada de residuos contenidos en la estrategia “Cero residuos”, apoyada por los movimientos sociales en Italia y en todo el mundo, que replantea completamente el ciclo de la producción y del uso de los recursos con el fin de limitar la producción de residuos y de reutilizar y reciclar todos los materiales, para lograr un impacto cero.

Otra economía y la agricultura

RIGAS apoya el desarrollo de nuevos modelos de producción, mercado y de economía y apoya las iniciativas de las redes de pequeños productores agrícolas y otras experiencias de economía solidaria como los distritos de economías que trabajan en la creación de circuitos económicos alternativos basado en el apoyo mutuo y su espacio de intercambio no están dirigidos al beneficio. Apoya procesos como el de la Ciudad de la Otra Economía, que quieren ser promotores y actores de otras formas de economía y de sociedad. En referencia al sector agrícola, RIGAS apoya las iniciativas de mercados agrícolas alternativos basados en la solidaridad con y entre pequeños productores como los GAS u la red “Terra Terra”. Promover y apoyar las economías locales como base para la construcción de un tejido productivo nuevo quiere decir principalmente apoyar la agricultura orgánica, logrando el doble resultado de mantener el empleo, con el establecimiento de dos mil millones de puestos de trabajo en todo el mundo, e revertir el curso del cambio climático de 2 grados centígrados, contribuyendo a poner un freno al fenómeno de los nuevos flujos migratorios, tutelando al mismo tiempo la biodiversidad (principalmente la de los productos agroalimentarios) y



valorizando los conocimientos tradicionales que siguen los ciclos naturales y no modifican el equilibrio ecológico del territorio. RIGAS recuerda que son los campesinos los verdaderos “trabajadores verdes” que alimentan al 70% de la población, consumiendo poca agua y petróleo a diferencia del Hidro-Agribusines, gran productor de emisiones.

Más en general, al frente de la crisis sistémica, trascendental, que socava los fundamentos mismos sobre los cuales se ha mantenido el proyecto de la modernidad, es necesario imaginar una teoría económica diferente que contemple la regeneración de los bienes comunes y de la creatividad del trabajo en el centro del esfuerzo cooperativo social. Necesitamos una conversión de los aparatos productivos y de consumo encaminado a reducir los flujos de materia y de energía utilizados en los ciclos productivos. Tal desafío puede ser superado solo por la ciencia, la tecnología y la mayor productividad que de hecho no sean dirigidas a aumentar los rendimientos y los retornos, sino a disminuir el impacto humano sobre la biosfera.

Bienes comunes y energía: una prioridad italiana

RIGAS promueve el desarrollo de nuevas políticas y prácticas de gestión de los bienes comunes que sea basada en una gestión pública que garantice la participación de la sociedad civil a través de una verdadera implicación en la toma de decisiones y en la previsión y disposición de mecanismos de control social.

En este contexto RIGAS apoya el proceso de los movimientos italianos por el agua que han llevado en el 2007 a la elaboración de la propuesta de ley popular por la desprivatización del agua y después la campaña por el referendo contra la privatización del servicio de agua en el 2010 y 2011. Del mismo modo, ha apoyado el comité del referendo “Si para detener las nucleares”.

Las campañas por el referendo han llevado a 27 millones de italianos a pronunciarse positivamente por el agua y la energía como bienes comunes, demostrando la particular sensibilidad de la población a los temas del referendo. A raíz de los resultados del 12 y 13 de Junio pasado se impone una reflexión profunda sobre los desafíos que la crisis nos plantea, compartiendo los bienes comunes, el trabajo y la necesidad de repensar el modelo de desarrollo. Una reflexión que se debe acompañar de propuestas y acciones concretas, en el centro de las cuales está la ley popular por la desprivatización del agua y el diseño de una plan energético nacional.

Energía y trabajo: por una democracia energética

El referendo sobre la energía nuclear ha llevado a la agenda política del país tres grandes cuestiones interrelacionadas entre ellas: el desarrollo de las renovables, el ahorro y la eficiencia energética, la respuesta al cambio climático y las oportunidades de trabajo y de modificación de los estilos de vida que todos esto conlleva. En un mundo donde el 80% de la energía proviene de los combustibles fósiles, es urgente una nueva economía fundada en la sostenibilidad ambiental, de bajas emisiones de CO₂, fundada en un modelo de producción distribuida de la energía, partiendo del reconocimiento de una necesaria revolución energética, en la búsqueda de un paradigma diferente de gestión de los recursos que vaya más allá incluso de la dicotomía público-privado.

Necesitamos un modelo energético que supere el extractivismo, basado principalmente en fuentes de abastecimiento sostenibles, del punto de vista social y ambiental. No necesitamos un modelo centralizado, más costoso, no seguro e insostenible, sino invertir en la descentralización de la producción a través de la creación de pequeñas unidades productivas, para promover la autosubsistencia y la soberanía energética territorial. Esto nos permitiría al mismo tiempo ir más



allá de la concentración de la producción y distribución en las manos de pocas empresas.

Por lo tanto debemos apuntar al rediseño de una política energética nacional basada en la creación de redes de producción energética desde la base que se concentre antes de todo en la eficiencia y el ahorro energético. La fuente de energía debe sin embargo basarse en el presupuesto que la energía es un bien común y, como tal, debe ser garantizada a todos y no puede ser confiada a particulares, pero delegada a los ayuntamientos o a las colectividades locales para garantizar una gestión eficiente. El interés de la comunidad y, de hecho, garantizar el disfrute de la energía y no hacer beneficio. Además, considerando la especificidad de cada territorio, son las propias comunidades las que pueden valorar las soluciones mejores. Que sea la energía solar, la eólica y otras fuentes renovables, la clave está en la gestión comunitaria de la energía.

RIGAS sostiene en Italia las propuestas y movilizaciones presentadas por los sindicatos destinadas a la tutela de los derechos y a la defensa del contrato nacional. Al mismo tiempo propone modelos de reconversión industrial alternativa sostenibles basados sobre la democracia y sobre los derechos de los trabajadores. En este sentido, se reconocen en el sector energético un punto de partida por la reconversión inclusiva de los derechos del trabajo. Solo en Italia, según un estudio de la Bocconi y de Confindustria, invertir en la eficiencia energética crearía en 9 años 1.600.000 puestos de trabajo y haría ahorrar 50 millones de toneladas de petróleo.

Como demuestra la experiencia de RIGAS, son los comités, las asociaciones, las administraciones locales virtuosas, sindicatos, trabajadores, estudiantes y mundo académico, fuerzas productivas, los que sacarán a la luz una sociedad en movimiento que tenga como objetivo común la defensa del medio ambiente y del territorio, el acceso a los servicios básicos, el derecho al trabajo en la perspectiva de la justicia ambiental y social. Es esta sociedad en movimientos la que tiene hoy la tarea de construir un nuevo “bloque social” capaz de llevar a cabo las transformaciones y las reformas necesarias para salir de las crisis, a partir de la energética.